



**JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA**

Bogotá, D. C., veintinueve de dos octubre de dos mil veintiuno.

**MEDIDA CAUTELAR - ACCIÓN DE LESIVIDAD
EXPEDIENTE: 2021 00283 00**

**ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES VS OLGA
BARRERA MARTÍNEZ**

Ingresa al Despacho la demanda interpuesta por la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** en contra de la señora **OLGA BARRERA MARTÍNEZ** para resolver sobre la **MEDIDA CAUTELAR** presentada por el apoderado de la entidad accionante, previa referencia a los antecedentes y fundamentos de la medida:

I. ANTECEDENTES:

Medida Cautelar Solicitada: El apoderado de la parte actora sustentó la medida cautelar de carácter suspensivo contra el acto de reconocimiento pensional acusado en los siguientes términos:

“Solicitó se declare la suspensión provisional de los efectos jurídicos de las resoluciones:

*LA RESOLUCIÓN GNR NO. 258914 DEL 26 DE AGOSTO DE 2015.
LA RESOLUCIÓN NO. GNR 362876 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015.
LA RESOLUCIÓN NO. VPB 6379 DEL 08 DE FEBRERO DE 2016.*

mediante la cual Colpensiones reliquida, modifica y confirma la prestación a la señora BARRERA MARTÍNEZ OLGA por un valor superior al que legalmente le corresponde.”

Sostiene que al realizar las reliquidaciones de la pensión de la accionante con los parámetros de la Ley 33 de 1985, se evidenció que no se tuvieron en cuenta los ciclos de noviembre de 2003 y enero de 2004 los cuales no se habían normalizado. Ciclos que al haber sido tenidos en cuenta en la nueva liquidación de los últimos 10,

desde el 2003 al 2013, arrojan un monto menor al otorgado, pasando de \$1.043.016 a \$1.034.523.

Trámite de la Medida Cautelar: De la Medida cautelar se corrió traslado a la accionante mediante auto del 08 de octubre de 2021 por el término de cinco (5) días hábiles, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 233 del C.P.A.C.A., para lo cual se le realizó la notificación personal en su correo electrónicos el día 14 de octubre de 2021.

Oposición a la Medida: No presentó oposición dentro del termino legal conferido.

Para resolver se **CONSIDERA:**

De conformidad con el artículo 230 del C.P.A.C.A., las medidas cautelares dentro del proceso contencioso administrativo pueden ser de carácter; preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión y deben tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda.

Dentro de las medidas cautelares que podrán ser adoptadas por el Juez, se encuentra la establecida en el numeral 3 del artículo 230 del C.P.A.C.A, la cual se refieren a la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos demandados y el respectivo restablecimiento del derecho. Sin embargo, para la adopción de dichas medidas se requiere del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 231 de la norma ibídem, la cual establece:

“Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares.
*Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por **violación de las disposiciones invocadas** en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del **análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.** Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. (...)*

Planteado lo anterior, se tiene que el numeral 3 del artículo 230 del C.P.A.C.A contempló como medida cautelar la suspensión de los actos administrativos, condicionada a que el acto acusado contrarie de manera clara, ostensible, flagrante o manifiesta lo dispuesto en normas superiores; violación que se debe constatar con el

simple cotejo de las normas que se confrontan o mediante documentos públicos aducidos en su solicitud, puesto que de requerirse un estudio de fondo, el juez debe agotar el procedimiento y diferir el pronunciamiento sobre la validez del acto acusado para el momento en que se dicte la sentencia.¹

Así, uno de los requisitos exigidos en la norma aludida, es la sustentación expresa de la petición, aspecto que fue ratificado por el Consejo de Estado inclusive desde antes de la expedición de la nueva codificación contenciosa administrativa, como se observa en providencia de enero 23 de 2003, Consejero Ponente Doctor Mario Alario Méndez, Referencia: expediente 3069, donde se especifica:

“(...)Entonces, para sustentar la solicitud de suspensión provisional, han de indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de violación, de modo expreso, como es la exigencia legal. Ello significa que para el efecto no es bastante la indicación de las normas violadas y la explicación del concepto de violación que se haga en la demanda como fundamento de sus pretensiones. No. La sustentación de la solicitud de suspensión provisional se repite, ha de hacerse de modo expreso, porque es exigencia legal.

Cabe señalar, sin embargo, como se ha explicado muchas veces, que el requisito de sustentar de modo expreso la solicitud de suspensión provisional se satisface con la remisión que se haga en la solicitud al capítulo de la demanda concerniente a las normas violadas y al concepto de la violación, criterio que en esta ocasión se reitera. Siendo, pues, que el demandante para el efecto se remitió a las normas legales citadas y al concepto de violación explicado en la demanda, debe entenderse cumplido el requisito legal(...)”²

Bajo los presupuestos enunciados, se resolverá la medida cautelar de carácter suspensivo de los efectos del acto administrativo contenido en la Resoluciones GNR No. 258914 del 26 de agosto de 2015, GNR 362876 del 18 de noviembre de 2015 y No. VPB 6379 del 08 de febrero de 2016 mediante las cuales Colpensiones reliquida, modifica y confirma la prestación a la señora BARRERA MARTÍNEZ OLGA por un valor superior.

El apoderado de la entidad actora sostiene que al realizar las liquidaciones no se tuvieron en cuenta los ciclos de diciembre de 2003 y enero de 2004 que al ser contabilizados en los últimos 10 años de cotizaciones de la accionada luego de su normalización, modifican el monto pensional.

En este punto se debe señalar que las modificaciones del monto pensional no son claras en el cuerpo de la demanda, en algunos apartes de habla de una disminución para el año 2021 de \$1.043.016 a \$1.034.522 (fl 6 Archivo digital Demanda) y en otros de \$1.026.411 a \$1.026.490 (fl 13 y 20 Archivo digital Demanda)

¹ Consejo de Estado, Auto 21845 .7/2002 M.P. Alir Eduardo Hernández Enríquez

² Consejo de Estado, sentencia del veintitrés (23) de enero de dos mil tres (2003), exp: 3069. M.P.: Mario Alario Méndez.

en ellos una disminución que oscila entre \$8.494 cuando da valores negativos en contra de la accionada.

Pese a lo indicado por el apoderado judicial de la entidad, este Despacho Judicial encuentra que la disminución en el monto pensional no obedeció a actuaciones en las que tuviera incidencia la accionante, sino a la mera normalización de los ciclos de diciembre de 2003 y enero de 2004. De igual forma, al ponderar la situación este Despacho Judicial considera que no se debe suspender una pensión sin tener la certeza absoluta de la nulidad de los actos administrativos que originaron el derecho. Debe agregarse que no existe discusión frente al derecho pensional, sino al monto real del IBL, cuya desviación por la normalización de ciclos altera el monto pensional en \$8.494 pesos. Valor que resulta ser ínfimo por lo que se exige a este Despacho Judicial tener certeza absoluta de la situación para decretar la medida cautelar solicitada y suspender los efectos totales de la pensión.

Igualmente, ha de recordarse que el decreto de la Medida cautelar debe obedecer, entre otros a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, por lo que este Despacho Judicial considera que es irracional y desproporcionado decretar la medida cautelar en los términos solicitados por la entidad cuando solo existe una desviación de \$8.494 pesos en la mesada pensional y no existe discusión del derecho pensional en sí mismo.

Por lo que se debe reiterar que el decreto de la medidas cautelares exige también el cumplimiento de lo establecido en el numeral 3 y los literales a y b del numeral 4 del artículo 231 del C.P.A.C.A que establece:

ARTÍCULO 231. REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES.
(...)

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:

- a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o*
- b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.*

En este sentido, la entidad no indicó como el no otorgamiento de la medida cautelar causaba un perjuicio irremediable para la entidad, como el no reconocimiento de la medida cautelar podría tornar nugatorios sus derechos y tampoco realizó un juicio mínimo de ponderación entre el interés público y la medida cautelar, por lo que ha de negarse la misma.

Finalmente se insiste en que la diferencia no genera un perjuicio irremediable para la entidad, la continuación en su pago no torna nugatorio el fallo y no existe un criterio valido de ponderación entre la suspensión total de una pensión y el pago de más de una suma tan inferior, que en todo caso podría llegar a ser recuperada por la entidad sin poner en riesgo el mínimo vital del accionante que se garantiza con el ingreso mensual que representa una pensión de vejez de poco más de 1 S.M.M.L.V.

En este sentido y siendo que la medida cautelar solicitada no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 230 y 231 del C.P.A.C.A. EL JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, administrando justicia en nombre de la República de Colombia,

II. RESUELVE:

PRIMERO: SE NIEGA la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos demandados conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE a las partes de conformidad con lo establecido en el Artículo 205 del C.P.A.C.A en concordancia con lo establecido en los artículo 8 y 9 del Decreto Legislativo 806 del 2020, a los correos, LUISFUENTES976@HOTMAIL.COM: notificacionesjudiciales@Colpensiones.gov.co paniguacohenabogados@gmail.com, paniguabogota4@gmail.com y en los correos oficiales de las entidades.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

**ROSSE MAIRE MESA CEPEDA
JUEZ**

FCS

Firmado Por:

Rosse Maire Mesa Cepeda
Juez Circuito
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingeniería
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3ef336921f08a648c0415ea25c8abe165067e3cab241cdc3c8396696535fae8e**

Documento generado en 29/10/2021 11:49:27 a. m.

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>